



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, primero (1) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Demandante: MANUEL SALVADOR GARCÍA ESCOBAR
Demandados: POSITIVA S.A. y ACP COLPENSIONES
Radicado: 05001 31 05 019 2021 00231 01
Sentencia: S-307

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite al grado jurisdiccional de Consulta en el que se conoce del proceso, con ocasión de la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el día 29 de marzo de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

MANUEL SALVADOR GARCÍA ESCOBAR acude a la vía judicial para que se ordene una nueva calificación de pérdida de capacidad laboral a cargo de la entidad que se estime pertinente, teniendo en cuenta la progresividad de sus enfermedades.

HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que sufrió un accidente laboral en el año 2009 cuando se cayó mientras subía unas escaleras, lo que le produjo trauma en el tobillo derecho; que le quedó como secuela dolor crónico de difícil manejo generando sintomatología depresiva asociada con intentos de suicidio; que también tiene fractura del calcáneo; que fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 4 de octubre de 2011 con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 37%; que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez decide establecer un 32.10% según dictamen del 14 de junio de 2012; que el 26 de octubre de 2016 POSITIVA S.A. negó su solicitud de realizar una nueva calificación al considerar que no había progresividad en las patologías padecidas; que el 13 de agosto de 2018 la EPS SALUD TOTAL informa que cuenta con diagnóstico de origen común y laboral con pronóstico desfavorable; y que COLPENSIONES tampoco accede a su solicitud en tanto la documentación aportada da cuenta de que las deficiencias son de origen laboral.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, POSITIVA S.A. acepta la ocurrencia de un accidente en el año 2011 y las consecuencias generadas, aclarando que siempre le ha prestado al demandante las atenciones necesarias y se han generado las incapacidades asociadas. Acepta también las calificaciones realizadas, pero agrega que el demandante ha sido valorado en varias oportunidades, siendo la última de ellas en el año 2015 cuando la Junta Nacional de Calificación de Invalidez determinó una pérdida de capacidad laboral de 37%. Señala que no se realizó una nueva valoración por no progresión de las secuelas. Se opuso además a las pretensiones indicando que solo es responsable de aquellas patologías que según la evidencia científica sean determinadas como de origen laboral. Como excepciones propuso

inexistencia de presupuestos materiales y formales para el nacimiento de obligación a cargo de POSITIVA, falta de legitimación por pasiva, enriquecimiento sin causa, compensación y pago.

COLPENSIONES acepta lo relacionado con el accidente, las patologías padecidas, las calificaciones de pérdida de capacidad laboral y las decisiones de ambas entidades de negar la realización de una nueva valoración. Se opuso a las pretensiones en tanto no existen soportes fácticos y jurídicos para dejar sin efectos los dictámenes anteriores y ordenar uno nuevo, siendo en cualquier caso la ARL la obligada a responder por la situación pensional del actor. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación demandada, falta de derecho para pedir, buena fe, prescripción, imposibilidad de condena en costas y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 29 de marzo de 2022, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín ORDENÓ a COLPENSIONES que proceda con el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral del demandante bajó los parámetros del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, esto es, teniendo en cuenta que puede ser controvertida ante las Juntas de Calificación de Invalidez. Ordena que todo dictamen que se emita sea puesto en conocimiento de POSITIVA S.A. para que pueda ser controvertido en las instancias correspondientes, ABSOLVIÉNDOLA de todas las pretensiones de la demanda. Finalmente CONDENÓ en costas a COLPENSIONES, fijando como agencias en derecho la suma de \$750.000.

Conoce la Sala del asunto por **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, el apoderado de POSITIVA S.A. presentó alegatos de conclusión a través de los cuales señala que no se dan las condiciones para la realización de una calificación integral, al menos no por su cuenta. Pide que se confirme la sentencia ya que no existen patologías que acrediten la capacidad laboral disminuida en un 50%.

La parte demandante solicita se confirme la sentencia teniendo en cuenta que desde la ocurrencia del accidente se han presentado otras patologías de origen común con concepto desfavorable de la EPS que hasta ahora no han sido objeto de valoración, es decir, nunca se le ha realizado una calificación integral.

CONSIDERACIONES:

Atendiendo al grado jurisdiccional de CONSULTA en el que se conoce del proceso, corresponderá a la Sala verificar la legalidad de la sentencia de primera instancia mediante la cual se ordenó a la ACP COLPENSIONES, realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral del señor MANUEL SALVADOR GARCÍA ESCOBAR bajo los parámetros del artículo 41 de la Ley 100 de 1993.

Según el planteamiento de la demanda, tanto POSITIVA S.A. como COLPENSIONES se han negado a realizar una valoración al demandante que tenga en cuenta la progresión de sus patologías desde la ocurrencia del accidente laboral que sufrió en el año 2011; la primera argumentando que las condiciones no han sufrido variación desde el último dictamen realizado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y la segunda porque dice que ante la existencia de patologías de origen laboral la encargada de realizar la valoración es la Administradora de Riesgos Laborales.

Antes de entrar a analizar la legalidad de la decisión de primera instancia en cuanto a la orden impuesta a COLPENSIONES, es preciso

resumir lo que hasta ahora ha acontecido y así tener un panorama más claro de la situación, advirtiéndole que en tres distintas oportunidades se ha adelantado el trámite de calificación ante las entidades del sistema.

- En la primera de ellas, POSITIVA S.A. emitió el dictamen de pérdida de capacidad laboral 16202 del 9 de diciembre de 2010 en el que estableció una pérdida de capacidad laboral de 16.58% de origen profesional, estructurada el 24 de septiembre de 2009. En él se tuvieron en cuenta como deficiencias "*Anquilosis de articulación tobillo derecho*" y "*Lesión de nervio sural derecho*".

Ante tal decisión no se presentó inconformidad alguna por el interesado.

- El 1 de agosto de 2011 POSITIVA S.A. hizo una segunda valoración al señor MANUEL SALVADOR en la que determinó una pérdida de capacidad laboral de 30.7%, igualmente con origen en un accidente de trabajo.

En esta oportunidad sí hubo controversia y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, mediante dictamen del 4 de octubre de 2011 se ocupó del caso, determinando una pérdida de capacidad laboral de 32.10% de origen profesional, con fecha de estructuración el 17 de noviembre de 2010. En este caso el diagnóstico de la calificación fue "*Dolor crónico irritable*".

Con ocasión del recurso de apelación presentado, la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ emitió su propio dictamen y lo hizo el 14 de junio de 2012. En él confirmó la decisión previa de la Junta Regional en todos sus aspectos.

- El 24 de diciembre de 2013 POSITIVA S.A. emitió otro dictamen dentro de un tercer trámite con este fin iniciado por el

demandante. Se trata del dictamen 472739 del 24 de diciembre de 2013 esta vez con una pérdida de capacidad laboral de 37% estructurada el 24 de septiembre de 2009, igualmente originada en un accidente de trabajo. En esta oportunidad se tuvieron en cuenta como patologías *“Fractura del calcáneo derecho”, “Síndrome doloroso regional complejo”, “dolor crónico intratable” y “trastorno depresivo mayor”*.

En este caso también se presentó inconformidad por el interesado y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA asumió el conocimiento y emitió el dictamen 48055 del 5 de marzo de 2014 en el que confirmó lo definido por POSITIVA S.A., es decir, determinó una pérdida de capacidad laboral de 37% estructurada el 24 de septiembre de 2009 derivada de un accidente de trabajo.

Finalmente, para cerrar el trámite administrativo, la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, mediante dictamen del 19 de septiembre de 2014, mantuvo las decisiones previas en cuanto a porcentaje, fecha de estructuración y origen, indicando como diagnósticos los siguientes: *“Fractura del calcáneo”, “Amputación traumática del pie a nivel del tobillo”, “fractura de la epífisis superior del radio” y “Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión”*.

Para el mes de julio de 2015, el demandante a través de su apoderada judicial inició todos los trámites tendientes a que se le realizara una nueva valoración por lo que consideró una *“mengua en la salud y funciones físicas”*, sin embargo, ambas entidades se negaron a hacerlo.

En lo que a COLPENSIONES respecta, que es lo que motiva el conocimiento del proceso en esta instancia, mediante comunicación del 20 de octubre de 2020 se le informa que *“Culminada la etapa de valoración documental, se evidenció que las patologías son por accidente de trabajo ocurrido en el año 2009, de lo anterior se*

desprende que la entidad llamada a realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral es su ARL", motivo por el cual la solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral fue rechazada.

Conforme con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución política, el Estado se convierte en garante del derecho de todos los habitantes del territorio Nacional a gozar de condiciones de seguridad social, relacionado como aquel conjunto de prestaciones, servicios, políticas, instituciones, entre otras, que brindan garantías frente a los distintos riesgos sociales que puedan afectar su capacidad y oportunidad de generar los recursos suficientes para una subsistencia acorde con la dignidad del ser humano.

Una de tales condiciones que afectan las posibilidades de acceder por sí mismo a un estado de seguridad social son los padecimientos de origen común o profesional, que afectan la capacidad laboral. Para ello el sistema de seguridad social establece la concesión de beneficios asistenciales y económicos, el primero de ellos comprende la atención médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, entre otras, tendientes a restablecer, en lo posible, las condiciones de salud. Por su parte las, prestaciones económicas pueden corresponder a una pensión de invalidez, una indemnización por incapacidad permanente parcial o un subsidio por incapacidad temporal.

Para el acceso de las prestaciones económicas por invalidez es necesaria una evaluación de pérdida de capacidad laboral, con la que se establece el grado de afectación al *"conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten al individuo desempeñarse en un trabajo"* (Artículo 3 Decreto 1507 de 2014).

Resulta que en el presente caso no existe duda en cuanto a que POSITIVA S.A. se ha encargado, en varias oportunidades, de valorar la capacidad laboral del señor GARCÍA ESCOBAR conforme los

lineamientos normativos que rigen la materia, concediendo los recursos de ley que en cada caso fueron presentados, lo que llevó a las Juntas de Calificación de Invalidez a realizar sus propias valoraciones. Todo lo anterior en virtud de un accidente laboral sufrido por el demandante en el año 2011 y que ha sido la causa de todas las patologías evaluadas y calificada.

No ocurre lo mismo en el caso de COLPENSIONES, entidad que hasta ahora se ha negado a realizar una valoración por el hecho de que las patologías reportadas son todas de origen laboral.

Sin embargo, se está desconociendo que la NUEVA EPS ha emitido un concepto desfavorable de rehabilitación en el que se registran patologías diversas a las ya conocidas y valoradas y que no están directamente relacionadas con el accidente sufrido. Mediante comunicación del 13 de agosto de 2018, dicha entidad le notifica a COLPENSIONES el pronóstico desfavorable del paciente y le informa que tiene diagnóstico de origen común y laboral, por lo que hace la remisión a efectos de realizar una *“calificación integral de todas sus patologías”*.

Esa notificación la acompaña del “FORMATO DE CONCEPTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL” en el que se registran las diferentes patologías diagnosticadas al paciente como *“Fractura del calcáneo derecho”*, *“Síndrome doloroso regional complejo”*, *“dolor crónico intratable”* y *“trastorno depresivo mayor”*, clara y previamente definidas como de origen laboral, pero incluyendo otras como *“hipertensión esencial”* y *“diabetes mellitus no insulino dependiente”*, que son de origen común.

Lo anterior requiere dar aplicación a lo establecido en el decreto 1352 de 2013, el cual dispone en su artículo 44 lo siguiente:

“ARTÍCULO 52. Procedimiento aplicado para la calificación integral de la invalidez. Las solicitudes que lleguen a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Nacional por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales o las Administradoras del Fondo de Pensiones, las Entidades Promotoras de Salud o las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, las Administradoras del Sistema General de Pensiones, **deben contener la calificación integral** para la invalidez de conformidad la Sentencia C-425 de 2005 de la Honorable Corte Constitucional y su precedente jurisprudencial, esto mismo aplicará para el correspondiente dictamen por parte de las Juntas de Calificación de Invalidez Regional o Nacional”.

Es decir, la calificación de pérdida de capacidad laboral que debe hacerse en casos como el del señor MANUEL SALVADOR, debe ser completa e integral, teniendo en consideración todas las patologías conocidas o diagnosticadas, sean de origen laboral o común. Si bien ya algunas de ellas han sido tenidas en cuenta en las valoraciones previas, en ningún caso se han incluido la totalidad de dolencias del paciente y es por eso que la EPS está haciendo la remisión con ese objetivo.

Esa conclusión se puede adoptar con fundamento en el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional que nació con la sentencia C - 425 de 2005 y que ha sido desarrollado en otras providencias como la T-518 de 2011, la T-341 de 2013 o la T-046 de 2019 y que ha sido acogido igualmente por la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral en sentencias como la del 26 de junio de 2012, rad. 38.614, reiterada en la del 24 julio 2012, rad. 37892, la SL 526-2012, la SL1987-2019, la SL 4297-2021 o más recientemente la SL 3008 del 13 de julio de 2022 en la que indicó:

“... es absolutamente factible que, dada la evolución de las patologías, la aparición de nuevos diagnósticos de un mismo origen o de una génesis diversa, pueda no solo determinarse en forma inicial un porcentaje de pérdida de capacidad

laboral, sino también revisarse en el sistema de seguridad social o por vía judicial una calificación que ya está en firme o realizarse una calificación integral que incluya factores comunes y laborales, con el fin de dictaminar la situación material de invalidez de una persona, lo anterior, con las características propias que supone cada uno de estos trámites de calificación."

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser confirmada.

Sin costas en esta instancia, en virtud del grado jurisdiccional de consulta en el cual se conoce.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el día 29 de marzo de 2022.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez

Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **444d51109a91116f35c5e603f6207c0de6de5f9d352b9f8a3e5b0d32c1aed4b9**

Documento generado en 01/12/2022 02:53:16 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>